

Las Cortes reclaman a Cataluña sus planes urbanísticos en el Delta del Ebro

Bruselas dice que el Gobierno puede modificar el Júcar-Vinalopó pero el proyecto debe cumplir lo establecido en 2003 para optar a la financiación

REDACCIÓN

La Comisión Europea ha remitido sendas respuestas a las quejas presentadas por el colectivo ecologista Adena y la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó-Alacantí-Marina Baixa -cuyas peticiones se debaten hoy en el Parlamento Europeo- en las que les advierte de que la financiación del trasvase está supeditada a que éste garantice soluciones al abastecimiento de agua potable a la población. La CE recuerda, en este sentido, en su respuesta que la decisión de Bruselas de cofinanciarlo con 80,1 millones de euros (diciembre de 2003) se tomó en base a lo establecido en el Programa Operativo Integrado Regional para la Comunidad Valenciana en el periodo 2000-2006 y una de las condiciones ineludibles era que el proyecto solucionara el abastecimiento urbano. Esta es la postura con la que la UE llega hoy a la sesión de la Comisión de Peticiones tras un año de investigación y tres meses de análisis del proyecto presentado por el Ministerio de Medio Ambiente que no garantiza el suministro urbano, ya que el agua que llegará desde el Azud de la Marquesa sólo sirve, en principio, para el regadío.

Bruselas ha dejado claro, no obstante, en sus observaciones a ecologistas y Junta Central, que el Gobierno es soberano para incluir en el proyecto las modificaciones que considere oportunas pero subrayando que para contar con respaldo económico comunitario no se podrán alterar las condiciones establecidas en 2003.

La Comisión de Peticiones del PE analiza esta mañana los informes presentadas a favor y en contra del trasvase Júcar-Vinalopó con la toma en Cortes de Pallás, en el marco de la investigación abierta por la CE tras recibir peticiones de la Junta Central de Usuarios, Adena y la plataforma Xúquer Viu. La citación a ambas partes se produce a pocos días de que Bruselas anuncie su decisión sobre la solicitud del Gobierno para que amplíe en 40 millones de euros la subvención que aprobó para el proyecto el 22 de diciembre de 2003 (Cortes de Pallás-Villena), hoy modificado con el polémico cambio de trazado.

La Junta Central se ha tomado la intervención de Martínez como un reto personal y hasta Bruselas han viajado 18 de los 20 miembros de la permanente. Sólo ha habido dos deserciones, la del alcalde de Aspe, Roberto Iglesias y la de la primera edil de Villena, Vicenta Tortosa, que sí se ha desplazado pero junto al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, defensor del proyecto que rechazan los usuarios. En la delegación que representa al Ministerio de Medio Ambiente también figura la sociedad de regantes Percam de Monóvar, que controla mil hectáreas y tiene asignados 700.000 m³ del futuro trasvase. Hasta ahora esta sociedad de regantes es la única que apoya recibir caudal desde la Marquesa.



Esteban González Pons

Servicios

-  [Enviar esta página](#)
-  [Imprimir esta página](#)
-  [Atención al lector](#)

[Anterior](#) [Volver](#) [Siguiente](#)

Noticias relacionadas

■ [Biar no podrá solicitar agua de Cullera](#)

La Comisión Especial para el Estudio de la Sequía de Las Cortes acordó ayer pedir al Gobierno catalán que remita los informes sobre la recalificación de suelo prevista en el Delta del Ebro, en terrenos destinados al cultivo, y sobre los planes para la construcción de viviendas y campos de golf en esa zona. Así lo aprobaron los miembros de la comisión, a la que no asisten los grupos de la oposición, después de que el conseller de Territorio, Esteban González Pons, denunciara las recalificaciones urbanísticas que se están realizando en los arrozales del Delta del Ebro, donde, según dijo, van a construirse entre 5.000 y 7.000 viviendas.

En esta sesión, la última de la serie de comparecencias que arrancaron en mayo con la presencia de expertos y cargos públicos - mayoritariamente propuestos por el PP - , también intervino el conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, quien defendió el trasvase del Ebro como solución para los problemas de agua que padece la Comunidad y, en concreto, la agricultura, y dijo que la desalación de agua del mar no es «económicamente admisible».

García Antón, que fue el encargado de cerrar las sesiones de comparecencias, acusó al Gobierno central de «no resolver los problemas» sino de crearlos a través de «blindajes, enfrentamientos de unos con otros y haciendo inviables políticas de solidaridad» en materia hídrica.

Asimismo, manifestó que la decisión del Gobierno de sustituir el trasvase de agua por la desalación significa la desaparición de la agricultura, algo que, a su juicio, no se puede consentir porque es «de las pocas competitivas» y además forma parte de la vida y la historia de la Comunidad.

Por su parte, González Pons propuso crear una comisión paritaria con el Gobierno para desarrollar, en los humedales de importancia internacional de la Comunidad, planes similares al aprobado para el Delta del Ebro, con una inversión de 1.500 millones de euros. Pons solicitó a la Comisión que incluya esta petición en su dictamen.